

La dinámica socio-laboral en el primer año del gobierno de ARENA

Claudia Solís

Resumen

En este primer año de gobierno de ARENA, los avances en la mayor parte de los sectores populares son nulos y muchos son los retrocesos. En este período han experimentado graves dolores y han manifestado grandes insatisfacciones por la política económica de ARENA, por los escasos avances en la pacificación y por la falta de administración de justicia, pues el nuevo gobierno ha mantenido la impunidad de los militares acusados de delitos. En este artículo se evalúan la dinámica de las organizaciones populares y las líneas básicas del programa social de ARENA en el primer año de gobierno.

Los indicadores económicos, especialmente los precios de la canasta básica, muestran claramente la exacerbación de la crisis social y laboral durante el primer año de gobierno de ARENA. En efecto, los precios de la canasta básica son los mejores indicadores del encarecimiento del costo de la vida para los salvadoreños. Este proceso inflacionario ha golpeado más a los sectores menos favorecidos económicamente: los trabajadores asalariados, los marginados sin ingresos y los campesinos en extrema pobreza (cuadros 1, 2 y 3). Otra manifestación de esta crisis han sido las reiteradas protestas populares contra la aplicación de las medidas liberales del plan económico de ARENA y contra otras medidas subsidiarias destinadas a favorecer a algunos sectores empresariales que no estaban contempladas en el plan. De

esta forma, el plan económico de ARENA tuvo un desarrollo distinto al planificado y sus resultados anuales no fueron los esperados.

En los cinco primeros meses de 1990, el proceso inflacionario ha sido mayor que el registrado en los últimos años del gobierno anterior. Esto se debe a los efectos de la liberalización de los precios de julio pasado, los cuales se han comenzado a sentir ahora y al reciente aumento del precio de la gasolina y a la devaluación disfrazada del colón frente al dólar. Todo esto ha deteriorado en gran medida la figura del presidente Cristiani, quien en sus primeros meses de gobierno gozó del beneficio de la duda por parte de algunos sectores populares.

En este contexto, podemos afirmar que, según

Cuadro 1
Estimación del costo de la canasta básica diaria
de alimentos en el área urbana
(enero-abril de 1990, en colones)

Alimentos	enero	febrero	marzo	abril
1. Tortilla de maíz	0.51	0.55	0.58	0.65
2. Frijol rojo	0.27	0.27	0.27	0.30
3. Arroz	0.25	0.25	0.25	0.25
4. Azúcar refinada	0.20	0.21	0.20	0.20
5. Huevos	0.42	0.44	0.43	0.47
6. Leche fluida	0.65	0.70	0.63	0.54
7. Carnes	1.70	1.74	1.83	1.93
8. Grasas	0.20	0.29	0.29	0.29
9. Verduras	0.55	0.47	0.45	0.43
10. Frutas	0.40	0.41	0.39	0.39
11. Pan francés	0.31	0.29	0.29	0.35
12. Sal común	0.01	0.01	0.01	0.01
Costo diario por persona	5.55	5.63	5.62	5.81
Costo diario familiar	25.20	25.56	25.51	26.38

Fuente: Ministerio de Planificación.

Cuadro 2
Estimación del costo de la canasta básica de
alimentos en el área rural
(enero-abril de 1990, en colones)

Alimentos	enero	febrero	marzo	abril
1. Tortillas de maíz	1.00	1.07	1.12	1.27
2. Frijol	0.37	0.37	0.38	0.41
3. Arroz	0.15	0.15	0.15	0.15
4. Azúcar refinada	0.16	0.17	0.16	0.17
5. Huevos	0.38	0.41	0.39	0.43
6. Leche fluida	0.30	0.32	0.29	0.24
7. Grasas	0.16	0.17	0.17	0.17
8. Verduras	0.55	0.47	0.45	0.43
9. Frutas	0.41	0.42	0.41	0.41
10. Sal común	0.01	0.01	0.01	0.01
Costo diario por persona	3.49	3.55	3.53	3.68
Costo diario familiar	19.16	19.49	18.38	20.21

Fuente: Ministerio de Planificación

Cuadro 3
Evolución del costo mensual
de la canasta básica de alimentos 1980-1989,
áreas urbana y rural

Año	Costo mensual Área urbana	Costo mensual Área rural
1980	290.10	227.70
1981	314.70	234.00
1982	338.40	252.30
1983	337.70	386.50
1984	429.60	343.50
1985	473.10	363.60
1986	528.90	386.10
1987	597.60	440.70
1988	649.80	513.90
1989	715.20	566.70

Fuente: Ministerio de Planificación.

las actuaciones del gobierno de ARENA en este primer año, éste no parece haber tenido una política laboral articulada, sino que, por el contrario, ante las protestas y manifestaciones laborales y populares, sólo reacciona ante la situación. Quizá la única excepción haya sido la negociación con las organizaciones laborales de ANDA, CEL y ANTEL. El programa social que ha presentado ARENA no ha satisfecho ni las aspiraciones ni los intereses de las organizaciones populares. Hasta ahora, el partido en el poder no parece contemplar en serio establecer vínculos con las organizaciones populares para encauzar y poner a producir los recursos de su programa social, el cual tiene asignados 960 millones de colones. Pese a la desarticulación de la política laboral del gobierno, en muchos años, ningún gobierno ha destinado tanto dinero para un programa social. Buena parte de este dinero parece estar destinado a sostener una intensa campaña publicitaria sobre dicho programa social.

A continuación analizaremos la dinámica de las organizaciones populares durante este año de gobierno de ARENA e intentaremos señalar las líneas básicas de la política laboral gubernamental, tal como se encuentran en los documentos

La opción preferencial del nuevo gobierno por los empresarios fue muy clara desde el comienzo.

oficiales, según las actividades de sus gestores y las áreas priorizadas.

1. La dinámica del movimiento popular

En este año, la profundización de la crítica situación de los sectores populares ha sido marcada por una tremenda des-concertación entre el gobierno (su programa económico, sus decisiones políticas, etc.) y los sectores populares. En parte, esto podría atribuirse a lo que ya se ha señalado en otros lugares como uno de los grandes vacíos de la actual gestión gubernamental, es decir, la ausencia de una política laboral coherente. En los primeros seis meses de gobierno de ARENA, las instituciones que prestan servicios básicos (CEL, ANDA y ANTEL) negociaron con sus respectivos sindicatos una serie de acuerdos para eliminar la posibilidad de huelgas y conflictos laborales. Quizás, el gobierno también pretendió con estos acuerdos presentar una imagen de moderación y eficiencia. En ese momento, en algunas de estas instituciones había conflictos laborales serios.

Por otro lado, la represión siguió fuera de control y el gobierno no hizo nada notable para detenerla (ver Gráfico 1). En aquellos momentos, se pensó que su error era no actuar o que era incapaz para controlar desde el principio al ejército. Cualquiera que sea la explicación, la represión contra los sectores laborales y sindicales es muy grave para un gobierno que supuestamente tiene pleno poder sobre el aparato estatal, incluida la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. La ofensiva de noviembre del FMLN y la desesperación que produjo en la alta dirigencia del ejército exacerbaron las acciones violentas de la Fuerza Armada y de los grupos paramilitares contra los miembros y las dirigencias de las organizaciones laborales, comunales, campesinas, cooperativas, de empleados públicos, humanitarias y religiosas.

Ha sido tal el acoso y la represión de las que han sido víctimas las organizaciones laborales y sindicales que, al final del primer año de su

gestión estatal, ARENA ha creado condiciones objetivas para que aquéllas se aproximen entre sí rápidamente. Ya durante la campaña electoral presidencial de 1989, cuando, en enero, el FMLN lanzó una de sus mejores propuestas de negociación y el gobierno demócrata cristiano la rechazó seis semanas después, dicha propuesta logró canalizar a su favor las exigencias populares de paz y democracia; en ese entonces hubo marchas, comunicados en radio y televisión, conferencias de prensa, etc. Los diversos sectores populares vieron en esa propuesta una oportunidad fundamental para la paz¹. Precisamente en este momento, las dos grandes centrales laborales del país, contrarias desde su origen, buscaron su primer acercamiento formal para unir sus fuerzas para jalonar el proceso nacional hacia la paz.

Sin embargo, otra vez la voluntad de los poderosos se impuso a favor de la guerra y la propuesta fue descartada pocos días después de la visita al país del vicepresidente norteamericano Dan Quayle, en la primera semana de febrero. No sin razón, buena parte de las organizaciones populares valoraron aquella visita del poder norteamericano, en esa coyuntura, como un signo desesperanzador. Sin embargo, la presión popular por la paz no cedió y las protestas contra la opción gubernamental por la guerra se multiplicaron.

En este contexto, el proceso electoral terminó en medio de acciones represivas, paros, huelgas y reclamos populares. La insatisfacción popular alcanzó tal grado que, las elecciones mismas fueron rechazadas por la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), la central laboral de oposición más grande. La UNTS consideró el proceso electoral como un mecanismo para legitimar la guerra. En la misma línea, casi todas las organizaciones populares, al conocer el triunfo electoral de ARENA, coincidieron en señalar que las elecciones en sí mismas no constituían avance alguno "para mejorar" para las mayorías, tal como lo había proclamado la propaganda electoral de dicho partido.

1.1. Los siete meses del gobierno de ARENA de 1989

El discurso del presidente Cristiani al tomar posesión de su cargo el 1 de junio de 1989 dio esperanza a algunos, pues, en él, el mandatario prometió que su gobierno se preocuparía de manera prioritaria por conseguir la paz y por disminuir la pobreza extrema. Dos meses después, la esperanza había desaparecido. Desde el comienzo de la gestión gubernamental de ARENA, la UNTS, la CST, el MPTL, ANIS y otras organizaciones expresaron sus incertidumbres y temores ante sus antecedentes ultraderechistas y escuadroneros. Al comienzo, estas denuncias chocaron con la figura "moderada" del presidente Cristiani y con la posibilidad que su línea civilista se lograra imponer sobre la tradición militarista del partido ARENA.

Los dos primeros meses del nuevo gobierno mostraron la tónica de lo que significaría la nueva gestión gubernamental para los trabajadores y los sectores organizados. El nuevo gobierno se presentó ante la opinión pública con "doble cara". En las instituciones autónomas (ANDA, ANTEL y CEL) negoció con los sindicatos respectivos, prometiéndoles un diálogo continuo para canalizar sus demandas y reincorporar progresivamente a los trabajadores despedidos por el gobierno anterior. Pero, por otro lado, en mayo, la prensa escrita recogió 27 actos represivos contra miembros de las organizaciones populares, en junio, 48, y en julio, 82. Simultáneamente, en otras instituciones estatales comenzaron a hacerse despidos masivos. En la misma línea, en la segunda mitad de junio se discutió la propuesta para reformar los códigos Penal y Procesal Penal, la cual, como su nombre lo indicaba —"ley antiterrorista"—, significaba la institucionalización y legalización de la represión a la oposición. La propuesta de ley pretendía cerrar los pocos espacios para ejercer la democracia que habían sido abiertos por el gobierno demócrata cristiano.

En julio de 1989, el movimiento laboral del sector privado experimentó cuán democrática sería su relación con el nuevo gobierno. El 3 de julio, efectivos de la Sexta Brigada de Infantería de

salajaron violentamente a los trabajadores de la empresa Pezca, S.A., del puerto El Triunfo, en huelga desde el 26 de julio de 1987; pese a que el 20 de septiembre del mismo año este movimiento huelguístico había sido declarado legal por el tribunal competente².

El segundo mes de gestión arenera se cerró con un duro golpe a la economía popular, al anunciar, el 20 de julio, el presidente Cristiani las nuevas medidas con las cuales comenzaría su plan económico de ajuste estructural. Estas medidas fueron puntualizadas el 31 de julio por el nuevo ministro de economía, Ing. Arturo Zablah. El gobierno liberalizó los precios de más de doscientos productos, aumentó las tarifas del servicio telefónico y disfrazadamente —con una presunta nueva normatización escalonada para el usuario— también subió las tarifas del transporte colectivo, de esta forma, el precio normal de 0.30, fue reemplazado por una tarifa gradual que alcanza hasta 0.60 para los recorridos más prolongados³.

La opción preferencial del nuevo gobierno por los empresarios fue muy clara en los dos primeros meses. En una sociedad como la nuestra, organizada sobre la injusticia estructural y los privilegios para unos pocos, esto marcó una evidente opción contra la inmensa mayoría de los salvadoreños. Así lo han denunciado desde entonces e incansablemente las organizaciones populares⁴.

En agosto de 1989, el gobierno enfrentó el primer gran efecto causado por la conjunción de las medidas anteriores. En ese mes y ante la profundización de la crisis económica, se consolidó la incipiente unidad de las diversas organizaciones populares, las cuales ya durante el proceso electoral se habían unido en torno al tema de la paz. Pese a la moderación del discurso del presidente Cristiani, la realidad derechista y liberal del partido ARENA se comenzó a imponer más pronto de lo esperado. Para las organizaciones populares, el nuevo gobierno se reveló como el enemigo común.

Las gestiones por la unidad y la concertación popular se aceleraron. El 15 de agosto se reunieron por primera vez desde la propuesta de paz, hecha por el FMLN, en enero, la Unión Nacional

Obrero-Campesina (UNOC) y la UNTS; el 19 de agosto se incorporaron en una nueva reunión el Sindicato de Trabajadores Textileros de la IUSA (STTIUSA) y el Frente Unido de Trabajadores (FUT), que aglutina a la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) y a la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM). De esta reunión salió su primer comunicado conjunto ante "las medidas económicas antipopulares y pro-oligárquicas" del gobierno; también protestaron por la preocupante situación del sector cooperativo reformado frente a la pretensión de desalojo de las tierras por parte de los antiguos propietarios, quienes, envalentonados, estaban exigiendo deferencia especial de parte de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El mes de agosto concluyó con una huelga por demandas reivindicativas de los trabajadores de INSINCA, la cual se desarrolló en medio de una gran presencia militar; los soldados impidieron la introducción de alimentos para los huelguistas. La huelga fue declarada ilegal, los huelguistas fueron desalojados de la fábrica y despedidos. En esta huelga, el gobierno de ARENA procedió ágil y eficazmente, reprimiendo a los trabajadores y defendiendo los intereses del sector empresarial.

La dinámica del mes de septiembre fue similar a la de los tres meses anteriores. Las gestiones unificadoras de los sectores populares experimentaron ciertos reacomodos, pues la Central General de Trabajadores no estaba de acuerdo con el acercamiento de la UNOC a la UNTS y las otras gremiales²; pero al final, la unidad se consolidó. A ello coadyuvó mucho la represión creciente; en septiembre se habían registrado ya 166 casos de violaciones de los derechos humanos contra los miembros de las organizaciones populares en la prensa escrita (ver el Gráfico 1).

En los últimos tres meses de 1989, la confrontación entre el gobierno y la oposición experimentó un acelerado endurecimiento. En octubre, los escuadrones de la muerte reaparecieron abiertamente en la vida nacional⁶. El 31 de octubre, una potente bomba explotó en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), dejando diez sindicalistas muertos, treinta heridos y el local totalmente destruido.

Con este atentado criminal, el proceso nacional arribó a una nueva fase: la represión aumentó, tal como está registrado en las estadísticas elaboradas a partir de la prensa escrita; en octubre hubo 73 violaciones contra los miembros de las organizaciones populares. En estas violaciones resalta la renovada crueldad y barbarie de las torturas, capturas y asesinatos. La tensión social aumentó y se temieron acciones de guerra en las calles de las ciudades.

En este contexto, el FMLN lanzó la ofensiva de noviembre, llamada "Fuera los fascistas, Febe Elizabeth Velázquez vive". En medio de su desesperación e incapacidad, la Fuerza Armada intentó aniquilar a los dirigentes del movimiento popular. En la noche del 15 al 16 de noviembre buscaron inútilmente a los dirigentes de la UNTS, de la Universidad de El Salvador y del Partido Social Demócrata. Esa noche sólo encontraron a los seis jesuitas de la UCA y a su cocinera y su hija. Después vino una ola de cateos, capturas, desapariciones y saqueos contra los miembros de las organizaciones populares y sindicales y sus locales. El estado de sitio amordazó las protestas.

1.2. Los cinco meses del gobierno de ARENA de 1990

Después de la ofensiva, la estructura organizativa popular quedó casi paralizada. Sin embargo, las mismas condiciones críticas del país forzaron a reactivar el movimiento popular y sindical. En este primer año de gobierno de ARENA han surgido al menos seis nuevas organizaciones para buscar la unidad de las fuerzas y así presionar y protestar contra las políticas gubernamentales que atentan contra los intereses y las aspiraciones populares. Las organizaciones nuevas más importantes son la intergremial, la intersectorial, el Comité Nacional de Despedidos Públicos, Privados y Municipales, la Asociación Democrática Campesina, el Frente Magisterial Salvadoreño y la Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias. El 2 de junio de 1990, el Comité Permanente del Debate Nacional, el partido Demócrata Cristiano, la UNOC, la UNTS, el PSAD, la CTS, AGEPYM, el Movimiento Nacional Revolucionario, el Movi-

miento Popular Social Cristiano, la Unidad Popular Democrática, la Unión Democrática Nacionalista, CONFRAS y FESINCONSTRANS denunciaron "las agresiones" de la política gubernamental en un comunicado conjunto.

En enero de 1990, se sintió con fuerza el deterioro de los salarios reales en las economías familiares. En el ministerio de agricultura despidieron a 727 trabajadores, pero luego reincorporaron a 582 gracias a las presiones y protestas de las organizaciones laborales. Aunque el gobierno de ARENA ha lanzado un programa social, éste no ha podido paliar los costos sociales del programa de ajuste estructural. El programa social de ARENA se concentró primero en la reconstrucción de la infraestructura habitacional y educativa destruida o dañada por los bombardeos y enfrentamientos ocurridos durante la ofensiva de noviembre en los principales centros urbanos del país.

Así, pues, en enero, las organizaciones populares se esforzaron para recuperar su voz silenciada por el estado de sitio y la represión. En la última semana de enero, el secretario general de FEASIES, Tomás Mazariego, declaró que "en este momento los trabajadores luchamos por la concesión de nuestras demandas socio-económicas y por la reapertura de espacios políticos... Una primera medida de las organizaciones laborales es la de reabrir los locales cerrados a partir del 11 de noviembre pasado por acciones represivas". En la segunda semana de enero, el gobierno suavizó la censura de la prensa y disminuyó el nivel de la represión en relación con el último trimestre; sin embargo, en la prensa escrita se registraron 53 casos de violaciones de los derechos humanos de miembros de las organizaciones populares.

El mes de febrero se caracteriza por lo que podríamos llamar "un movimiento popular de resistencia" contra la ola de cateos, capturas y militarización de los locales de las organizaciones. En cuanto la represión cedió, las organizaciones comenzaron a presionar para que se reabrieran los espacios políticos. La UNOC, cuyas actuaciones

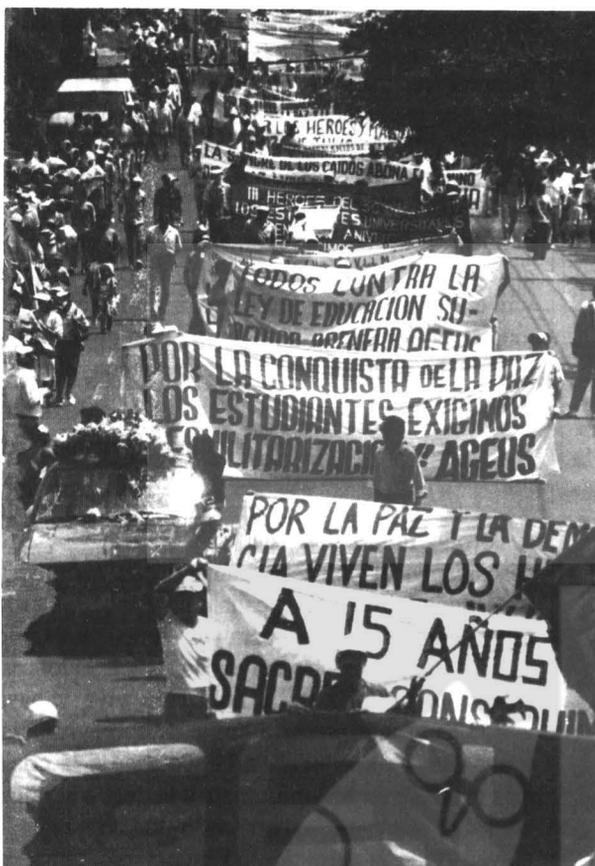
públicas encuentran menos dificultades que las de la UNTS por tener una tradición más moderada, impugnó públicamente las medidas decretadas contra la libertad de expresión y, el 23 de enero, presentó un importante recurso de inconstitucionalidad del estado de sitio. El 3 de febrero dio a conocer su propuesta para la pacificación nacional, "Alternativa para la paz en EL Salvador". La UNTS, por su parte, comenzó a reaparecer en público con más frecuencia, a través de conferencias de prensa.

A finales del mes de febrero, ya iniciada la recuperación del movimiento popular, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, coronel René Emilio Ponce, al solicitar a la asamblea legislativa la prolongación del estado de sitio para el mes de marzo, arguyó abiertamente que tal medida era necesaria para enfrentar las protestas populares contra las medidas económicas.

Sin embargo, en marzo, el movimiento popular seguía activo, esta vez en torno a las reiteradas protestas contra las medidas económicas y el estado de sitio, y a favor de la reactivación del proceso de diálogo por la paz. En la primera semana de marzo, la dirigencia de la UNOC calificó las medidas económicas, concretamente el aumento del costo de la vida, como "una violación abierta a los derechos humanos", porque "viene a poner en serio peligro la vida de la gran mayor parte de la población que vive en precarios niveles de subsistencia".

Marzo fue también un mes de aniversarios. El 6 de marzo se celebró el décimo aniversario del inicio del proceso de reforma agraria. La Asociación Democrática Campesina, fundada el 15 de febrero del presente año, lo conmemoró con un foro nacional, en el cual se discutieron y evaluaron los avances de la reforma agraria, así como sus problemas actuales. El foro exigió a la Corte Suprema de Justicia cesar sus fallos en favor de los ex propietarios de las tierras del sector reformado que, con demandas de inconstitucionalidad pretendían recobrarlas, y, en segundo lugar, se opuso a la parcelación, promovida por el gobierno

Al menos seis organizaciones populares nuevas han surgido buscando unificación de fuerzas.



actual como nueva política de la reforma agraria. De la misma manera, se opuso a la nacionalización de la banca, porque ella apoyaría el proceso de reconcentración de las tierras reformadas⁹. El 24 de marzo se conmemoró también el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 con una marcha, convocada por el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz para exigir la instauración de un real proceso pacificador.

En abril, las organizaciones laborales siguieron protestando contra los despidos de las instituciones estatales. Según sus denuncias, entre enero y marzo de 1990, 4,527 empleados públicos habían sido destituidos de sus cargos en los ministerios de agricultura, interior y economía, en Teatros Nacionales, el ISTA, INCAFE, INAZUCAR, CCE y otros. Esta política estatal de despidos desencadenó una huelga de hambre iniciada por los miembros de la Asociación de Traba-

adores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANTMAG) en el atrio de la iglesia El Rosario, el 21 de marzo, para exigir la reincorporación inmediata de los despedidos. El movimiento se fortaleció el 4 de abril, cuando se incorporaron a la huelga dos dirigentes de la UNTS; pero finalizó pocos días después como concesión de los huelguistas a la propuesta del arzobispado de San Salvador para que desalojaran el templo y aceptaran, como mediador ante los funcionarios estatales, al obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez.

En este mes, el nuevo proyecto de Ley general de educación, presentado en febrero por el ministro de educación a la asamblea legislativa, fue rechazado como antipopular por las gremiales magisteriales, porque privatiza la educación y acaba con las prestaciones que los maestros han conquistado en más de veinte años de lucha. Para defender su posición, las gremiales de maestros fundaron el Frente Magisterial Salvadoreño. Este sector criticó fuertemente el aumento salarial del 17 por ciento, decretado por el gobierno el 15 de abril. Esta medida buscaba paliar los efectos del programa de ajuste estructural. Este aumento, sin embargo, no compensa los efectos de la inflación, porque el poder adquisitivo de los salarios disminuye a un ritmo más rápido que el de los aumentos¹⁰.

En mayo, el movimiento popular y su proceso de concertación intergremial consiguieron logros importantes. La marcha del 1 de mayo, con la que tradicionalmente se celebra el día internacional del trabajo, tuvo una relevancia muy importante. En ella participaron una 80 mil personas, quienes proclamaron y exigieron instaurar un proceso de negociación para terminar pacíficamente con la guerra. Para las organizaciones, este proceso debe ser iniciado por el gobierno y el FMLN, pero en él deben participar los diversos sectores sociales y políticos, porque hay que terminar con el conflicto militar y establecer las bases para una sociedad justa. En la última década, ninguna demanda, ni reivindicación ni posición o discurso político había logrado concentrar a 80 mil personas (pese a las acostumbradas advertencias castrenses contra

las organizaciones que habían convocado); no hubo demandas sectoriales; la única consigna de la marcha fue la pacificación del país¹¹.

2. El programa social

El programa social de ARENA, aunque pobre en cuanto a su eficacia social, es importante como estrategia política gubernamental. Dicho programa no satisface las necesidades populares; más bien ha estado dirigido a paliar políticamente los costos sociales del programa de ajuste estructural. Todo parece indicar que el programa no ha sido pensado en términos sociales, sino políticos.

ARENA parece conocer estadísticamente la problemática nacional, pero no reconoce que ella sea resultado de la estructura social y económica. En consecuencia, sus esfuerzos están dirigidos a reactivar liberalmente dicha estructura, porque, según su visión, una vez lograda dicha reactivación, los niveles mínimos de pobreza serán superados. ARENA desconoce que el modelo económico que está promoviendo es el mismo que ha llevado a la crisis que desató la guerra civil hace una década. En efecto, el programa económico y social 1989-1994 comienza señalando que "la consecuencia más grave de la crisis que vive el país es la propagación de la extrema pobreza"¹². Según este programa, en 1988, de acuerdo a las estadísticas oficiales, había 300 mil familias (aproximadamente 1,500,000 personas) "ubicadas en extrema pobreza", situación que se entiende como "todas aquellas familias que no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia ni tampoco, como consecuencia de las condiciones en que viven, de salir por sus propios medios del estado en que se encuentran". Además, el 64 por ciento de las familias del país tiene ingresos inferiores a los 600 colones mensuales¹³. En consecuencia, el programa económico y social propone atacar la pobreza fomentando el desarrollo individual, "combatir la extrema pobreza es la prioridad y el fundamento del rescate nacional, de una mejor sociedad basada en el esfuerzo y la responsabilidad individual"¹⁴.

Para ello, ARENA propone "una nueva mentalidad, construir una sociedad solidaria y un nuevo concepto de Estado. Significa integración

social, valores morales, motivación, dignidad, *libre iniciativa* y solidaridad con los grupos de menores recursos"¹⁵. En esta línea, la solución propuesta para rescatar al país de la crisis e iniciar el desarrollo integral es "una estrategia que consiste en el establecimiento de una economía social de mercado, es decir adoptar un sistema económico y social que garantiza *la libertad individual, la propiedad privada y la competencia*, y que utiliza los recursos del país en beneficio de toda la población"¹⁶. Y mientras esto comienza a operar, la pobreza será enfrentada con el asistencialismo.

De acuerdo con los principios liberales del programa, la falla fundamental del problema social del país hace "peligrar las posibilidades de desarrollo futuro del país, debido a que se está descuidando el potencial humano que permita la superación individual de cada ciudadano"¹⁷. Desde este punto de vista, para el actual gobierno salvadoreño, el peligro mayor no radica, entonces, en que la mayoría de la población viva y haya vivido en el más precario límite de sobrevivencia, y que esto ha conducido a la sociedad a la crisis más grave de su historia (crisis a la cual aún no se ve salida cercana, exacerbando todavía más la gravedad de la situación). El gobierno tampoco considera que la situación actual se deba a la injusticia estructural, sino a un mero "descuido del potencial humano"; un potencial para aumentar la producción y así llegar a la "superación individual"¹⁸, de quienes tengan los medios para producir y el capital para financiarlos. Es la apertura a la libre competencia, tan desaprobada por la historia de este país (y de muchos más) como núcleo de cualquier estrategia de desarrollo.

El objetivo fundamental del programa económico-social de ARENA no es adoptar medidas económicas orientadas para superar la injusticia estructural (y con ello para superar los niveles de pobreza alcanzados con una distribución más justa del ingreso). Los planificadores de ARENA sólo intentan "evitar que la situación de deterioro económico y social continúe" y "*aliviar las más urgentes necesidades de las familias en extrema pobreza, mientras los resultados del programa generan las oportunidades para su superación.*

La opción para enfrentar la pobreza ha sido el desarrollo de un programa social de corte asistencialista.

Para este efecto se ha diseñado un programa de emergencia que atiende las principales necesidades de los más pobres desde el inicio de la implementación del programa económico y social¹⁹. En resumidas cuentas, este programa lo que busca es mantener con vida a las familias pobres, "aliviar las más urgentes necesidades de las familias en extrema pobreza"²⁰, para poder seguir adelante con la liberalización de la economía.

Sin embargo, la evolución de los precios de los productos de la canasta básica en el primer año de gobierno muestra —pese a la enorme campaña publicitaria desplegada— que, en sus primeros doce meses, el gobierno no logró ni siquiera acercarse a sus metas, con todo y lo cortas que éstas eran²¹. En efecto, los programas de asistencia alimentaria, de salud oral, de asistencia educativa, no hacen más que satisfacer, en términos relativos, menos de una décima parte de las necesidades diarias de algunos núcleos de la población, definidos como objetivos de las campañas. Por lo tanto, no cubren ni las necesidades más apremiantes diarias de los grupos beneficiarios, y menos aún llegan a cubrir a una parte significativa de la población. El incremento del costo de la canasta básica, sin embargo, afecta a todos; y, en consecuencia, los niveles de vida ya precarios siguen deteriorándose.

2.1. Las líneas de desarrollo del programa social

Las líneas básicas de asistencia social del plan de gobierno son las siguientes²²: (1) programas de atención materno-infantil: atención a las madres embarazadas y a los recién nacidos, incluyendo atención médica básica y un complemento alimentario; (2) programa de educación alimentaria, higiene familiar y salubridad en la vivienda para prevenir la desnutrición y las enfermedades infecto-contagiosas; (3) programa de entrenamiento para personas sin calificación para capacitarlas en el corto plazo para realizar actividades productivas con requerimientos mínimos de especialización;

(4) programa de empleo basado en la reconstrucción de la infraestructura productiva; (5) programa de dotación de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y saneamiento a los asentamientos populares; (6) programa para el desarrollo de la microempresa con apoyo del sector privado: crédito, materias primas y asistencia técnica.

Las líneas dirigidas a los rubros salud, capacitación técnica para la producción, generación temporal de empleo para construcción de infraestructura productiva, mejoramiento de servicios básicos y fomento de la microempresa serán desarrolladas, según el programa, "asignando especial énfasis a los programas preventivos para evitar que crezca el número de personas en extrema pobreza"²³. Esta afirmación es incoherente, dado el contenido de los programas propuestos, pues enfatiza la línea preventiva, mientras que sólo tres de los seis programas atienden a las condiciones de vida; los demás están dirigidos a la productividad, capacitando mano de obra, reconstruyendo la infraestructura y fomentando la microempresa.

La mayoría de estos programas comenzaron a desarrollarse en marzo de 1990. Según los informes dados a la prensa por los funcionarios gubernamentales responsables de su ejecución, los programas en marcha son los siguientes. En materia de educación: (1) una nueva Ley general de educación, cuyo objetivo fundamental es dar cabida en la educación nacional a otras instituciones o agentes nacionales e internacionales; de esta forma, el peso de la labor educativa no recaerá exclusivamente sobre el Estado; (2) un programa de capacitación obrera de 72 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y llevado a cabo por FEPADE, el ITCA y la ENA; (3) un plan nacional de educación para todos, coordinado por el ministerio de educación y ejecutado en cooperación con la UNICEF, la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial, y cuyo objetivo es generalizar la educación para que mejoren la salud y las

condiciones de vida, sobre todo de los niños y las mujeres; este programa contempla la llamada "canasta básica escolar," la cual se está entregando en algunos centros educativos²⁴.

En materia de salud se están desarrollando (1) un programa de suplemento alimentario para niños de 7 a 12 años, del cual se benefician unas 550 escuelas y está siendo ejecutado por los ministerios de educación y de salud; (2) la continuación de las campañas nacionales de vacunación, iniciadas por el gobierno anterior, con la cooperación de catorce instituciones; (3) una campaña de salud oral, inaugurada el 26 de marzo por los ministerios de educación y salud, que cubre a unos 750 mil niños de parvularia a cuarto grado, y cuyo objetivo es "cumplir el compromiso político internacional de lograr salud para todos en el año 2 mil..."; (4) el sistema nacional de salud pública ha sido abastecido con productos valorados en 72 millones de dólares; (5) para los próximos años está contemplada la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador.

En materia de vivienda e infraestructura se están desarrollando (1) programas ejecutados por el gobierno e instituciones internacionales de ayuda: Programa Nuevo Amanecer, para el cual la AID ha proporcionado 125 millones de colones para reparar las viviendas dañadas por los enfrentamientos durante la ofensiva de noviembre; CONARA, por su parte, ha entregado 48 millones de colones para reforzar el programa anterior (Plan especial de emergencia urbano); el Programa Nacional de Vivienda Rural se propone construir 1,500 viviendas con el sistema de ayuda mutua con financiamiento del PMA; la AID ha proporcionado dinero para reconstruir la infraestructura educativa dañada durante la ofensiva; (2) el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y la Comisión Nacional de Restauración de Areas (CONARA), a través de las alcaldías están llevando a cabo los siguientes proyectos: Municipalidades en acción, el cual comprende cuatro programas básicos de desarrollo municipal en todo el país, con la participación directa de las respectivas comunidades; CONARA y Municipalidades en acción repartieron 115 millones de

colones entre las alcaldías e instituciones gubernamentales y privadas del departamento de Chalatenango ("Chalatenango nuestro") para construir y reconstruir la infraestructura básica.

3. Conclusiones

Después de un año de gobierno, ARENA no ha dado muestras de contar con una política articulada para enfrentar las demandas de las organizaciones laborales y populares en general. En las pocas reuniones de funcionarios gubernamentales y representantes de las organizaciones populares, éstos han sido oídos, pero sin haber sido escuchados²⁵. Mientras el gobierno del presidente Cristiani continúe desoyendo a los sectores populares y "cumpliendo", sin superar la mera formalidad, los acuerdos para la concertación, la desconcertación social y económica seguirá, y el conflicto y polarización social continuarán profundizándose. Por otra parte, y como un fuerte agravante de esta situación, junto a la inexistencia de una política laboral, la represión sigue corriendo a cuenta de las instancias militares que siguen actuando con absoluta impunidad²⁶.

El proceso de concertación intergremial y la voluntad de acudir a las convocatorias del poder ejecutivo —pese a conocer su escasa voluntad negociadora y su aún más reducida capacidad para tomar decisiones—, de las organizaciones sociales que representan a los sectores mayoritarios parecerían estar demostrando que está caminando hacia un consenso básico en torno a la paz. Sin embargo, la sociedad política y los militares no parecen muy dispuestos a ello. La persistencia de altos niveles de represión contra los sectores populares es muestra clara de ello. Y en este sentido, quizá la actual situación socio-laboral vuelva a sugerir que es ahí, en estos sectores específicos de poder, donde está la clave del actual empantanamiento del proceso pacificador.

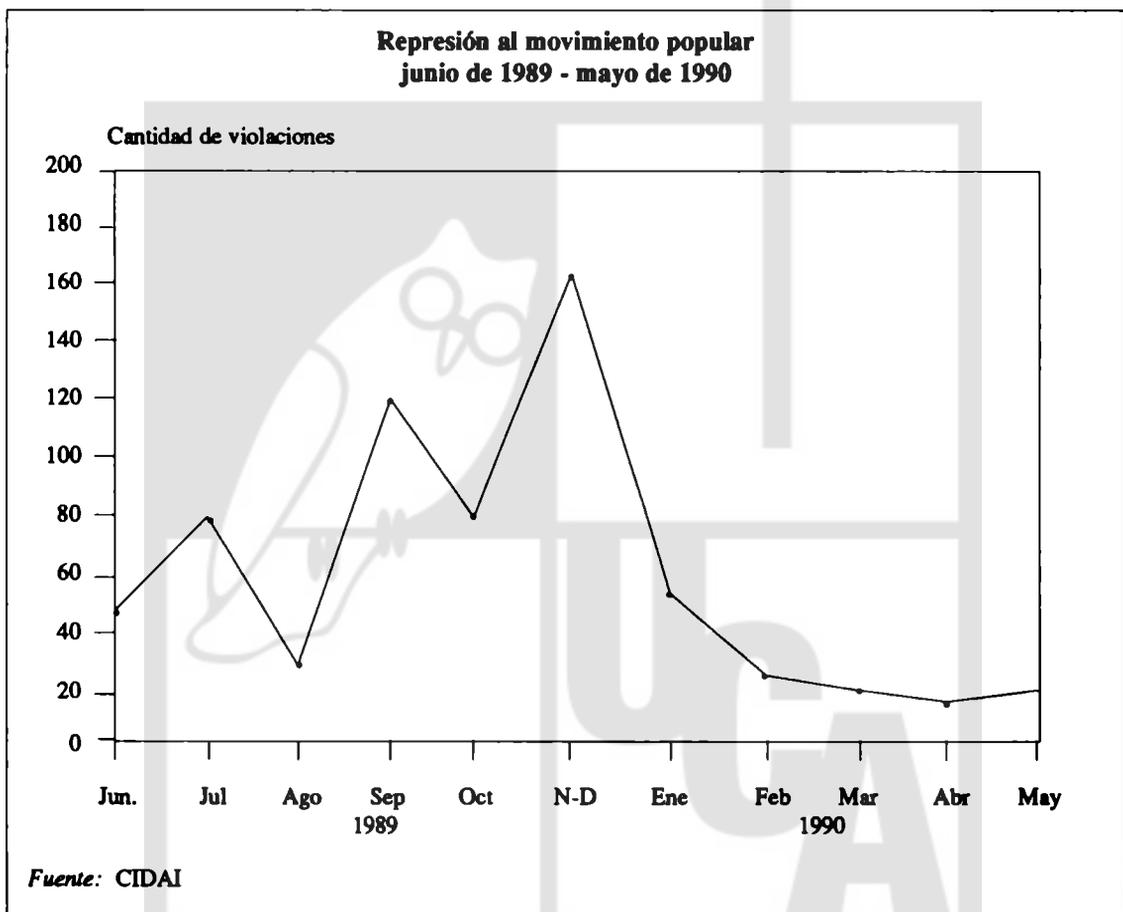
Las organizaciones comunales y laborales son un fiel reflejo de la situación actual, porque constituyen los sectores asalariados menos favorecidos y con menor capacidad de expresión pública por su poco acceso a la organización gremial y porque sus demandas reflejan la protesta ante la deteriorada situación económica y

social. La crítica situación de estos sectores es quizá lo que ha conducido más rápidamente a la convicción que el camino para ir liberando de guerra y conflicto al país es la concertación. Sin embargo, durante su primer año de gobierno, el presidente Cristiani ha caminado hacia la desconcertación social y laboral, pues sus políticas no satisfacen para nada las exigencias y demandas populares. Y ello no por falta de recursos financieros, porque ha contado con mucho dinero, sino porque no ha querido enfrentar la realidad de

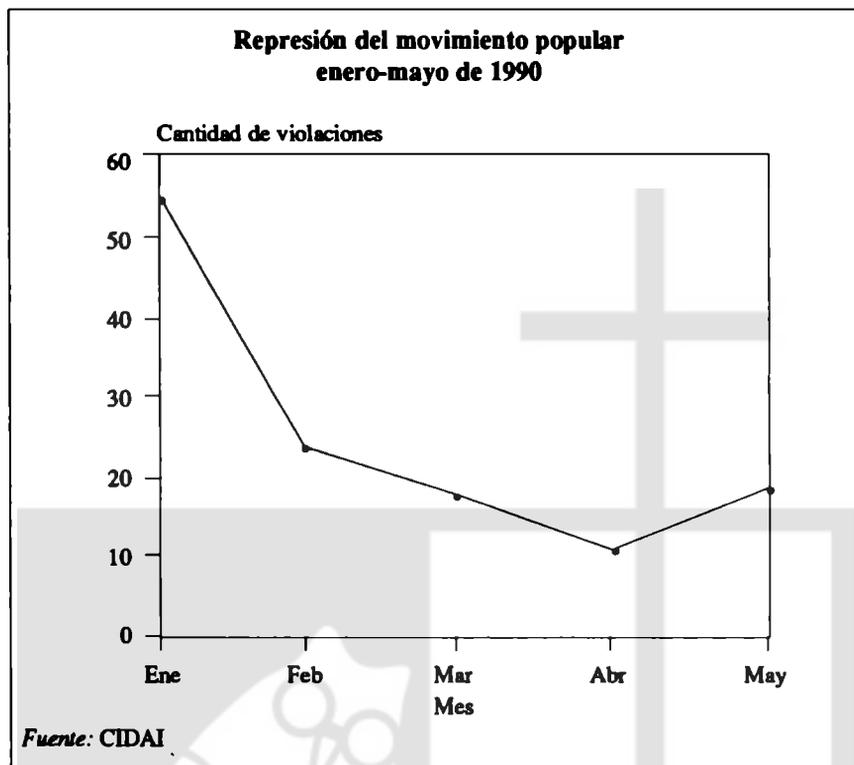
la pobreza de las mayorías populares. A esto se añade la ceguera política de las instancias militares que, en complicidad con las gubernamentales, han enfrentado la creciente oposición popular con la represión.

El asistencialismo no es la solución para la pobreza de las mayorías populares y diez años de guerra civil debieran ser suficiente argumento para preocuparse seriamente por establecer un modelo económico más creativo y más orientado a satisfacer las necesidades de la mayorías populares.

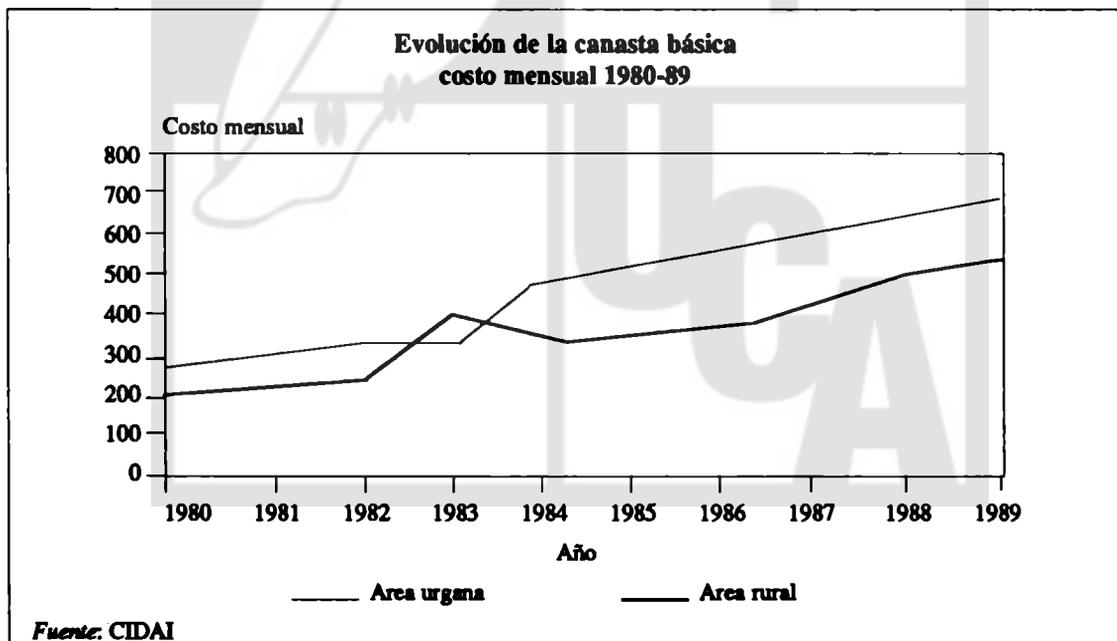
Gráfica 1



Gráfica 2



Gráfica 3



Notas

1. *Proceso 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 412.*
2. *Proceso 392.*
3. *Proceso 395.*
4. *Proceso 396.*
5. *Proceso 397.*
6. *Proceso 416.*
7. *Proceso 408; Carta a las Iglesias 200.*
8. *Proceso 416, 417.*
9. *Proceso 428, 429.*
10. *Proceso 415, 424.*
11. *Proceso 426, 427. Estudios Centroamericanos, 1990, 498-499.*
12. ARENA, "Hacia el rescate nacional. Programa económico-social", p. 30.
13. *Ibid.*, p. 3.
13. *Ibid.*
14. *Ibid.*, p. 31.
15. *Ibid.*, p. 32. El subrayado es nuestro.
16. *Ibid.*, p. 36. El subrayado es nuestro.
17. *Ibid.*, p. 4.
18. *Ibid.*
19. *Ibid.*, p. 41.
20. *Ibid.*
21. Basta con observar el aumento del costo de la canasta básica en las áreas urbana y rural.
22. ARENA, "Hacia el rescate nacional. Programa económico-social", p. 42.
23. *Ibid.*
24. *Proceso 424.*
25. *Proceso 431, 432.*
26. *Proceso 433.*

